

# Menos navajas y más política en el trasvase Júcar-Vinalopó



Hace un par de semanas, durante una mesa redonda para analizar la paralización que sufre el sector de la vivienda en Alicante, las personas que asistían al debate, todos agentes de la propiedad inmobiliaria, coincidían en responsabilizar al Gobierno central de la crisis, porque, y según las palabras textuales de uno de los invitados que llegaba de Elche, su estrategia



era hundir el sector en el Mediterráneo desviando las inversiones hacia otras zonas de España más afines a los socialistas y negándonos además el agua, poniendo como ejemplo la paralización del trasvase del Ebro. La afirmación fue un tanto injusta porque a nadie se le escapa que en la crisis del ladrillo influyen otros factores como la subida del euríbor, los precios disparados, la coyuntura internacional o, entre otras razones, la saturación de la oferta. No se les pudo convencer y eso que se les recordó los cerca de mil millones de euros que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero invierte en la provincia sólo en la ampliación del aeropuerto y el desarrollo del Programa Agua.

La reflexión cobra fuerza y actualidad después de analizar la jornada de trabajo UE-Gobierno-Consell celebrada el jueves en Alicante y asistir al penúltimo movimiento de Aguas del Júcar en torno al desarrollo de las obras del polémico nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó. Una obra de 300 millones de euros que, hoy en día, y pese a quien le pese, sigue sin usuarios y se realiza para traer hasta la provincia aguas residuales depuradas y de los retornos del regadío de los agricultores de la Ribera valenciana.

Y hay que recordar el último episodio protagonizado por los estrategas del Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana -ni un alicantino por cierto que les pueda meter en la cabeza que Alicante ni es Murcia ni es Valencia-, por lo sucedido en la reunión y tras la misma, del Programa Operativo Local de la Comunidad Valenciana -programa que, también hay que decirlo, no es el de la ministra Cristina Narbona y en el que la Generalitat no se mueve con la contundencia que debiera para defender los intereses de Alicante-. El representante de Aguas del Júcar retiró del orden del día la creación del grupo técnico que exige la UE para supervisar las obras del trasvase. ¿Por qué, pues porque, sencillamente, el equipo creado por Aguas del Júcar aparece completamente escorado hacia la cuenca cedente -de los dieciséis candidatos, quince llegan de Valencia y el alicantino es un títere-, gente que nunca ha querido trasvasar agua a Alicante y que si al final accedió al proyecto fue porque se modificó a su antojo. Que en la citada comisión no haya ni representantes de la Junta Central, ni de la Universidad de Alicante raya la locura, por mucho que el PSPV alicantino justifique la composición del grupo recordando los trabajos que se han encargado sobre el Júcar-Vinalopó a catedráticos de la UA, algunos con carnet del partido, o glosando las excelencias hidráulicas de la Politécnica de Valencia. El Ministerio de Medio Ambiente, como administración pública que es, insiste sin embargo en trabajar de espaldas a la provincia y de los futuros usuarios del agua representados por el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, persona a la que tildan de ariete del PP simplemente porque un día le cantara el cumpleaños feliz al ex presidente José María Aznar. Martínez, al que ha tratado de utilizar y utilizado el PP aprovechándose del desconcierto permanente en el que se mueve por confiar en personas e instituciones que le dan una bofetada tras otra, ha intentado reconducir por las buenas y por las malas la situación y al final se ha convertido en un quijote que sólo puede confiar en los agricultores, los principales protagonistas de esta película pero a los que se ha ninguneado desde el primer momento. Error grave del Ministerio de Medio Ambiente cuya obligación es trabajar por el bien de todos los alicantinos, piensen como piensen y voten a quien voten, algo que no parecen entender los rectores de Aguas del Júcar.

El último varapalo le llegó el jueves desde Bruselas en forma de misiva de la UE contra su proyecto para cambiar la toma del agua de Cullera al Azud de Antella. Una carta dirigida personalmente

Una revelación del departamento que dirige Cristina Narbona que confirma que la vía europea se ha agotado. Lejos de entrar a valorar el contenido del escrito -se desestima un proyecto teóricamente examinado el pasado junio cuando la Junta Central lo envió en julio- la pregunta que se hace cualquier observador imparcial es la siguiente: ¿Cómo puede controlar el Gobierno una carta personal dirigida a Andrés Martínez. Respuesta

sencilla e inocente: a la UE le importan un carajo lo que piensen los regantes alicantinos y, desgraciadamente, como parece lógico, creen a pies juntillas las tesis de un Ministerio que en la modificación del proyecto no ha actuado con la claridad que se tiene que exigir. Y si no que lo expliquen.

El Gobierno, que continúa adelante con un proyecto de 300 millones de euros de dinero público para realizar un trasvase que no convence a los usuarios y que sustenta Aguas del Júcar bajo el argumento de que será aceptado en cuanto los «tajos» de los nuevos tramos estén abiertos, haría bien en dedicar sus energías a la búsqueda de la negociación y el consenso en lugar de centrarlas en batallas políticas por unos votos, apartándose de su obligación de dar respuesta a las reclamaciones y necesidades de los ciudadanos, independientemente de su color político.

Hasta el momento los argumentos de Aguas del Júcar suenan a excusas de mal pagador de una sociedad cuya única obsesión debe ser la de tratar de explicar y convencer a los agricultores, sus administrados y los que pagan el sueldo de sus directivos, de que su proyecto es el mejor. El Gobierno está obligado a hacer el mejor trasvase Júcar-Vinalopó y, hoy por hoy, el consenso no existe y la calidad del agua de Cullera divide a los expertos. Ahí es donde debiera radicar la preocupación del Ministerio de Medio Ambiente y no en ver como enemigo al presidente de los usuarios al que un día sí y otro también tratan de desprestigiar. Sólo así se evitará alimentar el resentimiento de una provincia que se cree maltratada por el Gobierno Zapatero y se entenderá que lo que se defiende es realmente lo mejor para Alicante.

El Ejecutivo central no tiene la culpa ni de la recesión inmobiliaria, ni de que gran parte de Alicante ocupe geográficamente una de las zonas más áridas y secas de España, pero está obligado a trabajar para que los habitantes de esta tierra dejen de pensar que algunos de sus dirigentes dan por perdida la provincia, en votos y, lo que es peor, como una tierra próspera y puntera que produce millones de euros para las arcas públicas. Comportamientos como los que se llevan con el Júcar-Vinalopó no ayudan para nada.